

Crónica del debate nacional

Carlos Acevedo

Antecedentes

El debate nacional por la paz, cuyo desarrollo ha puesto al país en estado de reflexión nacional sobre el problema del conflicto bélico durante los últimos cuatro meses, no ha respondido a una iniciativa extemporánea o precipitada del arzobispado de San Salvador. Por el contrario, responde a un propósito que la Iglesia católica —y particularmente, Monseñor Rivera— ha venido madurando desde hace por lo menos dos años, pero cuya concreción se había ido posponiendo por diversos motivos. En cualquier caso, constituye una iniciativa enmarcada en el contexto de los ingentes esfuerzos que el arzobispado ha venido desplegando para abrir un horizonte de racionalidad a la finalización de la guerra, esfuerzos que en todo momento han recibido el respaldo no sólo del pueblo cristiano de El Salvador, sino también del Papa Juan Pablo II, de diversas iglesias de dentro y fuera del país y de todos los hombres de buena voluntad.

Ya en febrero de 1987, el referirse a tal propósito, el obispo auxiliar de San Salvador,

Monseñor Gregorio Rosa Chávez, subrayaba la urgencia de un debate nacional entre los diferentes sectores del país para superar las profundas divisiones prevalecientes en la sociedad salvadoreña. En aquel momento, la idea, todavía embrionaria, no había adquirido un perfil suficientemente delineado. "Es una idea nueva" —decía el obispo— "que encontrará también caminos nuevos. El debate nacional, que no tiene cauces ni mecanismos, habrá que encontrárselos, pasará mucho tiempo quizás, pero consideramos que no lo podemos abandonar" (*El Mundo*, 23 de febrero de 1987, p. 5). En principio, el arzobispado vislumbraba que el debate, como mecanismo de reconciliación nacional, podía ser complementario del diálogo entre el gobierno y el FMLN-FDR, de modo que en aquél no entrarían las partes directamente involucradas en el conflicto, sino sólo el resto de fuerzas sociales y políticas del país. Con todo, el arzobispado no planteaba un esquema de debate cerrado: "en la fórmula que se encuentra queda la posibilidad de que ambos estén presentes (el gobierno y los frentes revolucionarios) y eso queda a la creatividad de todos, pues esta-

mos abiertos a diferentes fórmulas."

Algunos días después, al abundar sobre la idea del debate, el propio arzobispo, Monseñor Rivera y Damas, manifestaba lo siguiente: "Quisiéramos que fuera como una idea que va madurando poco a poco hasta que llega a realizarse... yo creo que habría que implementar, como se dice, la forma de llevar a la práctica esto, sin prisas, pero tampoco dando demasiado tiempo. Hay que proceder con la debida prudencia, en la apta selección de los medios para llegar al fin conociendo una situación" (*El Mundo*, 2 de marzo de 1987, p. 6). También Monseñor Rivera pensaba que el debate podía ser un mecanismo complementario del diálogo directo entre el gobierno y el FMLN-FDR; consideraba éste como "insustituible," en la medida en que, si las partes directamente involucradas a nivel político y militar en el conflicto no llegaban al acuerdo de finalizar la guerra, el país seguirá desangrándose. Monseñor abrigaba la esperanza de que "el debate pueda abrir el camino del diálogo."

La idea encontró una amplia acogida de parte de todos aquellos sectores que sufren en carne propia los estragos de la guerra, así como de quienes tienen la sensibilidad cristiana suficiente como para solidarizarse con ellos. Incluso el jefe del estado mayor de la Fuerza Armada, general Adolfo Blandón, indicó que "cualquier debate que se realice con el objeto de alcanzar la paz, es digno de tenerlo, en cuenta y es una acción loable, principalmente si lo hace la Iglesia católica" (*El Mundo*, 2 de marzo de 1987, p. 7).

La coyuntura era propicia para la germinación de la iniciativa. A nivel nacional, acababan de tener efecto, con éxito notable, las negociaciones para la liberación del coronel Avalos y de un numeroso contingente de reos políticos, las cuales abrieron un nuevo horizonte a las posibilidades de humanización del conflicto. A nivel regional, el plan de paz para Centroamérica propuesto por el presidente Arias comenzaba a abrirse paso y

a generar un amplio consenso favorable en la comunidad internacional.

Empero, el curso subsiguiente del proceso político, en su doble dimensión de incremento de la polarización ideológica y endurecimiento de las partes directamente enfrentadas a nivel militar, fue enrareciendo la atmósfera para el debate. Adicionalmente, la perspectiva de un nuevo proceso electoral, planteado como única opción política a la solución del conflicto, motivó al arzobispado a posponer la implementación del debate nacional.

Las elecciones de marzo dejaron muy mal sabor en el electorado, a la vista de un escrutinio que la propia derecha impugnó como fraudulento y de un órgano legislativo desdoblado en dos asambleas tozudamente enfrentadas entre sí. La coyuntura postelectoral no ofrecía un horizonte muy esperanzador a la solución del problema fundamental en la guerra. La realización del debate nacional se tornó verdaderamente perentoria; perentoriedad tanto más imperiosa cuanto que previamente habían fracasado muchas otras iniciativas que alternativamente habían buscado una solución política a la guerra.

Desde el gobierno hasta el FMLN-FDR, pasando por la derecha moderada y los sindicatos de diversas tendencias ideológicas, virtualmente todas las fuerzas sociales y políticas más representativas del país se han pronunciado en algún momento en favor de una salida "política" al conflicto. Sólo la ultraderecha y sus cascarnes de fachada (cruzada Pro Paz y Trabajo, MAN, Unidad Nacional por la Libertad, Cámara de la Libre Empresa, Asociación de Profesionales Salvadoreños, Instituto de Relaciones Internacionales, ISEPES, etc.) se han pronunciado categóricamente en contra de solucionar políticamente la guerra, por motivos que tienen que ver más con las vísceras que con la razón.

Obviamente, la gama de interpretaciones de lo que significa una solución "política" a la guerra ha sido muy amplia. Para los sec-

El presupuesto fundamental del debate es la urgencia de ponerle fin al desangramiento del país.

tores más progresistas y realistas del país, tal alternativa incluye como un momento constitutivo suyo —aunque no se reduce a él— un proceso de diálogo-negociación directo entre el gobierno y el FMLN-FDR. Para el gobierno y la derecha moderada, en cambio, la solución política implicaría la formación de un bloque de consenso nacional que exigiría al FMLN la deposición de las armas y su sujeción al ordenamiento legal vigente. Desde esta segunda perspectiva, el diálogo directo entre el gobierno y el FMLN no aparece como un momento fundamental de la solución política a la guerra sino, a lo más, como un paso ulterior cuyo contenido se reduciría a comunicar al FMLN las condiciones en que habría de entregar los fusiles e incorporarse al juego "democrático." Una versión intermedia entre la postura del gobierno y la de la ultraderecha fanática sería la de ARENA, en tanto admite que hay que "dialogar," pero excluyendo del proceso al propio gobierno y, por supuesto, al FMLN. Según ARENA, las diferentes rondas de conversación habidas hasta la fecha entre el gobierno y los frentes insurgentes no habrían servido más que para oxigenar una gestión demócratacristiana políticamente en bancarota y para ofrecer al FMLN espacios de recuperación de fuerzas para luego reanudar con mayores bríos su tarea de destrucción del país.

No resulta extraño que, en este clima de profundas divergencias sobre la manera de solucionar "políticamente" el conflicto, la solución política misma haya ido perdiendo credibilidad y la guerra se haya extendido y profundizado. Detrás de las formulaciones de buenas intenciones, los hechos han evidenciado frecuentemente de parte de ambos bandos escasas voluntades efectivas para un diálogo fructífero. Por ello era urgente un serio esfuerzo nacional que obligara a las partes involucradas directamente en el conflicto a no seguir defraudando las expectativas de paz de toda la nación.

Arranque del debate

En el mensaje a la nación que el vicepresidente Castillo Claramount leyó el 1 de junio recién pasado ante la asamblea legislativa en representación del presidente Duarte, el mandatario se pronunciaba en favor de encontrar "lo más pronto posible una fórmula de consenso nacional, que respetando los valores de libertad de nuestro pueblo y de la institucionalidad de la República, nos ofrezca una propuesta viable que permita a todos incorporarse al proceso democrático" (*El Mundo*, 1 de junio de 1988, p. 1). En este marco contextualaba el presidente Duarte su invitación a los partidos políticos para articular una propuesta de consenso a serle presentada al FMLN. Bajo el pretexto de que el eje en torno al cual debía generarse ese "consenso nacional" eran los partidos políticos, el gobierno rehusó reanudar el diálogo con el FMLN.

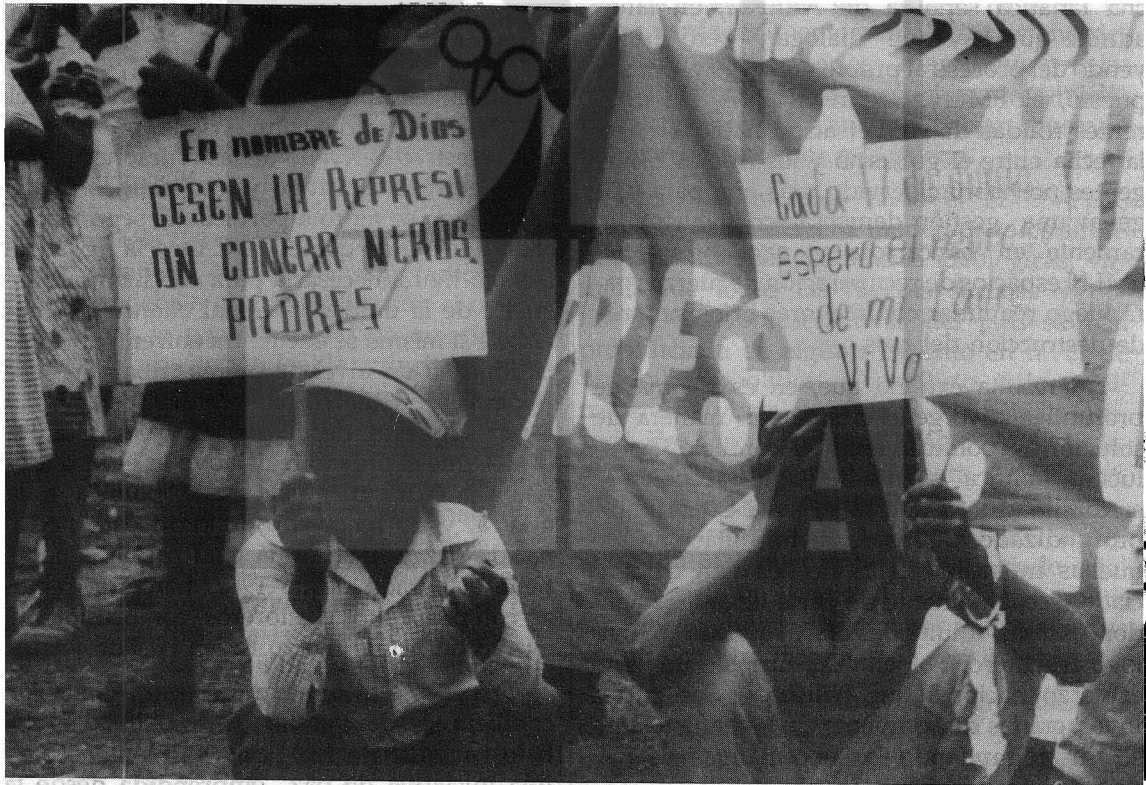
Sin embargo, el rechazo a reunirse con el FMLN no ha sido compensado por ningún fruto efectivo derivado de las reuniones sostenidas entre el ejecutivo y los partidos. ARENA mismo se retiró a partir de la segunda de ellas, aduciendo que el PDC carecía de la autoridad moral necesaria para conducir la búsqueda de la unidad nacional cuando al interior de sí mismo se encuentra enfrentado entre facciones a un nivel de pugna tribal. En contrapartida, ARENA ha venido sosteniendo —por supuesto, desde que controla la asamblea— que el órgano legislativo es el foro idóneo para discutir una salida política a la guerra, y ha relanzado su propuesta nacional de paz y libertad, la cual presuntamente tiene elaborada desde 1983, pero que remozó con propósitos electoreros con ocasión del evento del 20 de marzo recién pasado.

Frente a esta pretensión de enfrentar el conflicto desde la esfera de lo político, el debate nacional de la Iglesia se planteó como una iniciativa de paz emprendida desde la

esfera social formalmente considerada. El debate fue diseñado como un foro de discusión social, no política. Por ello, la convocatoria no incluyó a las fuerzas formalmente políticas (gobierno, partidos, FMLN-FDR). A él estaban convocadas "todas las fuerzas sociales más representativas de la vida nacional," de las cuales se pedía "su punto de vista sobre la situación conflictiva del país, sus causas y los mecanismos que puedan conducir a una solución pacífica de la misma" ("Propuesta del arzobispo" incluida en los documentos de invitación). Sin embargo, el debate no se presentaba en ningún momento como una opción excluyente de otros foros de discusión; la invitación misma de Monseñor Rivera reconocía la existencia de otras "laudables iniciativas, algunas de las cuales están actualmente en curso."

A comienzos de junio, el debate se encontraba ya en su última fase de preparativos. El domingo 5 de junio, Monseñor Rosa Chá-

vez informó que el arzobispo se aprestaba a redactar la carta de convocatoria al evento. El viernes 17 de junio, Monseñor Rivera y Monseñor Rosa Chávez, en su calidad de presidente y vicepresidente del comité organizador, respectivamente, anunciaron formalmente la convocatoria a más de cien fuerzas sociales invitadas a participar en el evento. La nómina de organizaciones invitadas (102 en total) incluía a 19 instituciones de la empresa privada, 25 instituciones de profesionales, 17 instituciones universitarias y educativas, 28 organizaciones laborales, otras 5 asociaciones populares, 5 organismos humanitarios y 3 instituciones cristianas de diversas denominaciones. Posteriormente, 27 organizaciones más solicitaron su incorporación. El comité organizador admitió la solicitud de 13 de ellas, sugiriendo a las restantes incorporarse a algunas de las fuerzas ya convocadas y con las cuales guardarán afinidad.



A partir del 20 de junio, el comité organizador inició la distribución de los documentos de invitación, los cuales incluían la carta de convocatoria, la visión pastoral del drama de El Salvador, la propuesta del arzobispo para realizar el debate, el cuestionario e instructivos para el mismo y la lista de fuerzas sociales invitadas (cf. Documentación, ECA 476). La visión pastoral expresaba la percepción que de la situación de conflicto tiene la Iglesia católica a la luz del evangelio. La propuesta comprendía la descripción de la naturaleza, objetivos, organización, fuerzas sociales participantes, normas de procedimiento y cronograma. El cuestionario comprendía seis apartados: descripción sucinta de la situación actual de El Salvador, causas de la actual situación conflictiva, análisis de las soluciones propuestas hasta ahora, alcances de Esquipulas II, propuestas de solución al conflicto y otras propuestas.

Los objetivos principales que la propuesta atribuía al debate eran tres. En primer lugar, alcanzar un amplio consenso sobre ciertos puntos mínimamente suficientes para favorecer un pronto cese al fuego y la remoción de las causas que dieron origen al conflicto y continúan alimentándolo; el segundo objetivo era favorecer un ambiente de diálogo no polarizado entre las fuerzas sociales que genere un nuevo estilo de concertación social; y, el tercero, presentar el fruto de este consenso al gobierno, Fuerza Armada y partidos políticos, por un lado, y al FMLN-FDR, por otro, a efecto de que den los pasos necesarios que permitan ponerle fin a la guerra.

Todo el debate se levantó sobre un presupuesto fundamental no debatible: la urgencia de ponerle fin al desangramiento del país. Se trataba de un imperativo ético y cristiano, por encima de toda ideología y de toda politiquería. La propuesta puso un cuidado sumo de definir el debate como "una iniciativa eclesial inspirada en una preocupación netamente pastoral." Pero ello fue inútil de cara a los

ataques de la derecha.

Reacciones

En conjunto, la iniciativa eclesial encontró un eco favorable, en varios casos incluso entusiasta y encomiástico, en diversos sectores de la sociedad civil. Pese a no haber sido formalmente incluidos en la convocatoria, el debate también encontró respaldo de parte de varios dirigentes políticos. Así, por ejemplo, el candidato presidencial del PDC, Fidel Chávez Mena, subrayó que sólo la Iglesia gozaba de la autoridad moral suficiente para poder echar a andar una iniciativa de esa índole. Inclusive ARENA, por voz del coronel Sigifredo Ochoa, expresó en un primer momento que el debate podía ser complementario a su "Propuesta nacional de paz y libertad," ya que "los objetivos son los mismos" (*Diario Latino*, 9 de junio de 1988, p. 5). Fue solamente en un segundo momento, cuando la empresa privada desató una intensa campaña contra el debate, que ARENA adoptó también una postura frontalmente contraria a la iniciativa, ya que el propio coronel Ochoa empezó a esgrimir el socorrido argumento de que éste violaba el artículo 82 de la constitución política. Otros dirigentes políticos, como María Julia Castillo —quien descalificó la metodología empleada como "escolástica"— mantuvieron desde un principio un actitud abiertamente hostil hacia el debate.

Significativamente, quienes primero rechazaron el debate no fueron las fuerzas sociales invitadas, sino grupúsculos de ultraderecha que no habían sido convocados precisamente en razón de su escaso peso social y de sus posturas ampliamente conocidas como fanáticas. Entre estos cascarones de fachada de los intereses oligárquicos de siempre, la Cruzada Pro Paz y Trabajo y los autodenominados Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) e Instituto Salvadoreño de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (ISEPES), entidades fantasmales y sin ninguna infraestructura sería a cuya sombra un grupúsculo de bachilleres e intelectuales mediocres intenta

deslegitimar todo esfuerzo de cambio en El Salvador en dirección de una sociedad más humana, asumieron la conducción de la reacción de la ultraderecha.

Entre las organizaciones invitadas, la primera en romper astas contra el debate fue, como no podía ser menos, la Asociación Cafetalera (ASCAFE), en carta abierta dirigida al presidente de la conferencia episcopal (CEDES), Monseñor Marco René Revelo, emitida el 7 de julio. La misiva, cuyos argumentos hemos recogido en otro lado (*Proceso* 344; "Realidad nacional," Números 68 y 69 de las ediciones de Diario *El Mundo* del 14 y 21 de julio de 1988), evidenciaba una abigarrada mezcla de apreciaciones estereotipadas, presunciones apriorísticas y juicios descaminados sobre cuestiones de hecho. En conjunto, las acusaciones esgrimidas por los cafetaleros contra la Iglesia eran verdaderamente alucinantes y apenas merecerían ser tomadas en cuenta si no fuera porque reflejaban, llevada al límite, la postura de otros grupos empresariales de trayectoria más moderada y progresista. Tras los cafetaleros, también la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), la Asociación de Ganaderos (AGES), la Cámara de Comercio e Industria (CCIES) y las universidades Matías Delgado y Evangélica anunciaron que tampoco concurrirían al debate ("Crónica del mes de ECA 477). Todas estas entidades reincidían en el mismo argumento de fondo opuesto por ASCAFE al debate: al promover el diálogo como vía de solución al conflicto, la Iglesia no sólo está descuidando su labor pastoral, sino también viola el artículo 82 de la constitución, el cual le impide inmiscuirse en política.

A tal extremo llegaron los desvaríos en la interpretación de la constitución en relación a este punto, que Monseñor Rivera se vio urgido, en su homilía dominical del 17 de julio, a dictar una cátedra de hermenéutica jurídica a

quienes tan a la ligera percibían en la constitución presuntos impedimentos contra el debate. En el fondo de las objeciones operaba una confusión lamentable en la comprensión conceptual de lo que es la esfera de la política de partidos y la esfera de la praxis social. Ninguno de los detractores fue capaz de distinguir la diferencia entre la política "partidista," a la cual, con justa razón, la constitución veda su participación a la Iglesia, y la preocupación social por el bien común, la cual constituye una dimensión exigida por la concreción histórica del Evangelio. El Estado está en su legítimo derecho e incluso deber de exigir a la Iglesia que no se inmiscuya en la lucha por el poder político —el evangelio mismo también se lo prohíbe—, pero no puede impedirle en modo alguno que su predicación y su praxis pastoral coadyuven al establecimiento de las condiciones materiales que requiere el perfeccionamiento sobrenatural del hombre. El artículo 82 de la constitución prohíbe lo primero, no lo segundo, como bien lo señaló Monseñor Rivera a los detractores del debate.

En contrapartida, el respaldo de las organizaciones populares fue particularmente decidido. El 11 de julio, en conferencia de prensa ofrecida en el local de la Confederación General de Sindicatos (CGS), el comité ejecutivo de la Coordinadora de Solidaridad de los Trabajadores (CST) felicitó al arzobispado por haber asumido una iniciativa que por más de ocho años habían venido demandando los sectores populares, y reiteró el apoyo de siete centrales sindicales afiliadas cuyas que habían sido invitadas al debate (FENASTRAS, FUSS, FESTIAVTSCES, CODYDES, CGS, FEASIES y FESTRAS). El mismo día, la Confederación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador (COACES) difundió un comunicado de respaldo al arzobispado y de exhortación a las fuerzas participantes a "man-

El debate creó un estado masivo de reflexión nacional en torno a la crisis.

tenerse firmes en su posición... ante las amenazas de los enemigos de la paz y del pueblo." Por los mismos días, otras numerosas organizaciones laborales manifestaron su respaldo al debate, entre ellas la UNOC, UNTS, UPD, AGEMHA, CTS, FESINCONSTRANS, SITINPEP, ASTA, AGEPYM, etc. Por su parte, el 22 de julio, la CEDES emitió un comunicado dando su expreso respaldo al debate. Los obispos calificaban de "imperativo moral" la búsqueda de "los medios que pueden conducir a la pronta finalización de este conflicto" y prometían sus oraciones para que la iniciativa "pueda alcanzar el fin propuesto."

A partir del 23 de julio, el desarrollo del debate entró a una nueva fase. Formalmente, ese día vencía el plazo para que las organizaciones participantes entregasen al comité organizador su aporte escrito con las respuestas al cuestionario. A esas alturas, unas 60 organizaciones habían respondido favorablemente a la iniciativa. Contra lo que habían augurado los detractores del debate, la mayoría de ellas no puede considerarse como organismos de "fachada" del FMLN. Pese a la tenaz campaña de la derecha para hacer aparecer el debate como un foro sectario, unilateralmente conformado por organizaciones marxistas o filo-comunistas, la nómina de participantes resultó ser bastante diversificada y pluralista. Entre otros, habían respondido positivamente a la invitación los sectores empresariales aglutinados en el Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños (CONAES) y la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios (AMPES) y gremios de profesionales como el Colegio de Arquitectos y la Asociación Salvadoreña de Sociología. En el sector universitario, junto a la Universidad de El Salvador y a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, también las universidades Albert Einstein, Francisco Gavidia, Nueva San Salvador (UNSSA) y Tecnológica consideraron que desde las cátedras universitarias se podían aportar luces específicas a la solución del

conflicto que desangra al país sin que por ello su talante académico quedara desvirtuado.

El 26 de julio, el comité técnico adscrito al comité organizador inició el procesamiento de los 53 aportes escritos recibidos hasta esa fecha. En realidad, se habían recibido 54, pero el documento de la CGS se traspapeló por un error involuntario. En los días subsiguientes otras ocho organizaciones remitieron sus aportes: Universidad Tecnológica, Unidad Popular Democrática (UPD), Movimiento por el Arte y la Identidad Cultural (MAICES), Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes (FEASIES), Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de Oriente (FECORAO), Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), So-



ciudad General de Artistas de Variedades (SGAV) y Asociación de Cooperativas de Producción Agropecuaria Integradas (ACOPAI). Debido a que estos aportes llegaron después del plazo último de entrega, ya no pudieron ser procesados e incluidos en el *corpus* del documento-síntesis. Del resto de fuerzas sociales invitadas, 29 comunicaron por escrito que no participarían. Las restantes 24 no enviaron ninguna contestación.

De las 29 organizaciones que declinaron participar y comunicaron tal decisión por escrito, solamente seis rechazaron frontalmente el debate. Tales fueron la ASCAFE, la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFE), la Sociedad de Comerciantes e Industriales (SCIS), la Cámara de Comercio e Industria (CCIES) y las universidades José Matías Delgado y Evangélica. Con excepción de ASCAFE, que ni siquiera se dignó responder expresamente a Monseñor Rivera, sino que reclamó a Monseñor Revelo, todas las respuestas restantes fueron muy respetuosas, aunque fuertemente críticas de la iniciativa del arzobispado. Otras entidades eludieron criticar frontalmente el debate, sugirieron vías alternativas para encarar el problema de alcanzar la paz. Así, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) respondió que sería más oportuno relanzar los mecanismos de pacificación propuestos por Esquipulas II, puesto que éstos todavía no estaban agotados, antes que dispersar esfuerzos emprendiendo nuevas iniciativas, como la del debate. La Asociación de Productores de Henequén (HENSALVA) expresó que la búsqueda de la paz debía canalizarse a través del sistema de partidos políticos. La Asociación de Avicultores (AVES) se mostraba en principio dispuesta a participar si al debate no asistían los grupos que verbalmente apoyaban el diálogo por la paz, pero que "han sido los primeros en salir a la calle con violencia."

La Cooperativa Algodonera (COPAL), en una primera misiva a Monseñor Rivera, suscrita por su director-secretario, Luis Méndez

Novoa, el 28 de junio, aplaudía la iniciativa y prometía asistir. Posteriormente, sin embargo, en una segunda comunicación fechada el 4 de julio, suscrita nuevamente por Méndez Novoa, así como por el director-presidente de la entidad, José Antonio López Echeverría, la COPAL alegaba que razones de carácter estatutario le impedían participar. Otras organizaciones que también adujeron impedimentos de carácter estatutario para concurrir fueron la Asociación de Productores de Caña (PRO-CAÑA), la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), la Corporación de Contadores de El Salvador, la Comisión gubernamental de Derechos Humanos (CDH) y el Consejo Salvadoreño de Menores. Por su parte, Marco Antonio Interiano, presidente del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI), manifestó al arzobispo, en misiva fechada el 11 de junio, que "gustosamente aceptamos vuestra invitación y esté seguro que pondremos todo nuestro aporte para alcanzar las metas." Sin embargo, no asistieron al debate por enfermedad de su presidente.

Un nutrido grupo de organizaciones manifestó enfrentar dificultades de falta de tiempo suficiente para reunir una respuesta de consenso que expresara el sentir de sus asociados. Este fue el caso de la Asociación Nacional de Enfermeras (ANES), la Asociación de Secretarías Ejecutivas Salvadoreñas (ASES), la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, la Sociedad de Abogados de Occidente, la Asociación de Abogados de Oriente, el Colegio de Químicos y Farmacéuticos, el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE) y el Centro de Investigaciones Tecnológicas y Científicas (CENITEC). Por su parte, la Asociación de Trabajadores de CÉL (ATCEL) manifestó su pleno respaldo al debate, pero explicó que el grave conflicto interno con la patronal tenía acaparados su atención y esfuerzos. También la fracción de la UPD encabezada por Jesús Amado Pérez Marroquín manifestó su pleno respaldo a la iniciativa, pero

El debate ha contribuido a clarificar quiénes están a favor y quiénes en contra de una paz con justicia y libertad para todos los salvadoreños.

no puedo responder por escrito al cuestionario dentro del plazo especificado.

Otro grupo de organizaciones explicó que el pluralismo ideológico prevaleciente entre sus miembros tornaba difícil recoger una respuesta que pudiese considerarse como representativa del sentir de todos ellos. Tal fue el caso del Ateneo de El Salvador, la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) y del Colegio Médico. Este último, empero, solicitó al comité organizador se le permitiese enviar observadores al desarrollo del evento. La asociación de Medios Publicitarios (AMPS), por su parte, explicó que el principio de imparcialidad que exigía el ejercicio del periodismo le impedía participar.

En conjunto, todas las respuestas fueron muy respetuosas, con excepción de la de AS-CAFE. Una buena parte de entidades, inclusive, lejos de impugnar la iniciativa eclesial, le auguraron el mayor de los éxitos. Este dato no puede perderse de vista al momento de analizar la posición de las fuerzas que declinaron participar la iniciativa en sí misma, como ha querido hacerlo creer la lectura interesada de la derecha.

A partir del 26 de julio y por todo el período de las vacaciones agostinas, la comisión designada por el comité organizador trabajó en la elaboración computarizada de un documento que sintetizó los aportes recibidos. A estas alturas, el debate nacional había conseguido ya con creces propiciar un estado masivo de reflexión nacional en torno a la crisis del país y contribuido a clarificar quiénes están a favor y quiénes en contra de una paz con justicia y libertad para todos los salvadoreños. En la acción misma de rechazarlo, sus detractores habían vertido fuera del debate las opiniones que hubieran podido

formular dentro, con toda libertad, de haber accedido a la invitación del arzobispado.

El primer proceso de depuración de los aportes recibidos, hecho por la comisión técnica, arrojó unas 1.400 fichas donde se recogían las proposiciones principales formuladas por las organizaciones participantes. Este proceso cristalizó en un primer documento intermedio de 323 tesis principales, las cuales intentaban sintetizar las opiniones más coincidentes. Sobre la base de este documento intermedio, la comisión técnica elaboró un segundo documento-síntesis, el cual redujó a 164 las tesis principales.

Paralelamente, entre el 18 de julio y el 11 de agosto, el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA corrió una encuesta sobre la base de los puntos contenidos en el cuestionario del debate. La muestra final obtenida fue de 1.266 cuestionarios válidos. La encuesta fue corrida en los catorce departamentos, tanto entre la población rural como urbana, subdividida en cinco estratos sociales. Significativamente, el porcentaje de rechazos a responder la encuesta fue de 19.1 por ciento, superior al porcentaje habitual de rechazo a las encuestas del IUDOP. El rechazo provino principalmente de los estratos sociales más acomodados de la población encuestada. Ello sugiere que la feroz campaña de desprestigio orquestada por la derecha contra el debate a través de los medios de comunicación social habría exacerbado los celos de ciertos sectores que en principio habrían podido estar abiertos a la iniciativa del arzobispado, pero que, finalmente, habrían sido dominados por el temor de que ella respondiera a un complot tramado desde Moscú para instaurar en el país un despiadado totalitarismo marxista-leninista. Pese a ello, la encuesta reflejó una vez más que la mayoría del pueblo pobre y sencillo desea

vehemente la paz. El 4.5 por ciento de los encuestados opinó que el diálogo y la negociación serían la mejor manera de ponerle fin a la guerra, reiterando así la misma opinión que tantas otras veces ha recogido el IUDOP.

También fuera del país el debate nacional continuó cosechando importantes adhesiones. El 7 de agosto, Monseñor Rosa Chávez informó que el Consejo Episcopal de América Latina (CELAM), reunido en Bogotá, había manifestado su pleno respaldo a la iniciativa. Monseñor señaló que "la selecta audiencia del clero continental reaccionó con plena simpatía hacia esta iniciativa de paz y ofreció el inestimable apoyo de su oración" (*Diario Latino*, 8 de agosto de 1988, p. 6). Por otra parte, sin embargo, el prelado lamentó que "algunas plumas muy conocidas" trataban de "minar la confianza que el pueblo más sufrido

y sus más sensibles dirigentes han puesto en el debate nacional."

El 18 de agosto, el comité organizador presentó a la prensa el documento de trabajo a partir del cual se realizó la siguiente fase del debate: la asamblea pública, durante la cual las organizaciones participantes discutieron el documento-síntesis en orden a "lograr un mayor consenso sobre un número menor de tesis," según lo formuló Monseñor Rosa Chávez. El documento de trabajo, un libro en formato azul de 700 páginas, incluía los documentos de invitación, los aportes de las 62 organizaciones participantes, las comunicaciones de las 29 organizaciones que por diversas razones habían declinado participar, el documento-intermedio, el documento-síntesis y un anexo con un resumen de la encuesta del IUDOP. El documento-síntesis sirvió de



base para que las organizaciones verificasen si las 164 tesis recogían adecuadamente su propia posición y, sobre todo, para que estudiaran las opiniones de las otras fuerzas participantes.

Mientras el comité técnico elaboraba el documento-síntesis del debate y las organizaciones lo sometían a estudio, el proceso político global del país fue escenario de otros dinamismos concurrentes a la solución pacífica del conflicto, si bien por cauces formalmente distintos a los del debate.

El 13 de agosto, el presidente Oscar Arias invitó a la comandancia del FMLN a reunirse en San José para "buscar una salida al estancamiento de las negociaciones" con el gobierno salvadoreño. El día 17, la comandancia aceptó formalmente la invitación. Según informes procedentes de Costa Rica, fechados el 22 de agosto, el presidente Arias habría iniciado gestiones para que el gobierno salvadoreño autorizara la salida de una delegación del FMLN hacia Costa Rica. El mandatario costarricense indicó, la noche del 19, en la Universidad de Costa Rica, que aún no había recibido respuesta del gobierno salvadoreño a su solicitud, sino informes que "indican que en estos momentos no hay voluntad del gobierno para reanudar el diálogo con la guerrilla." El 20, Arias declaró a ACAN-EFE que no presionaría al presidente Duarte, pero que mantendría sus gestiones "con el afán de ayudar a que cese la guerra y se abran las negociaciones civilizadas."

Por su parte, el presidente del FDR y secretario general del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), Guillermo Ungo, manifestó el 22 de agosto que el clima político "no es favorable" para la reanudación del diálogo entre el gobierno salvadoreño y el FMLN-FDR. Las aseveraciones de Ungo fueron corroboradas por declaraciones del Ministro de Cultura, Roberto Viera, en el sentido de que el gobierno no iría a un nuevo diálogo con los frentes revolucionarios sin haber integrado previamente un "frente interno," cu-

ya base doctrinal la constituiría la declaración conjunta suscrita el 28 de julio por el presidente Duarte y los partidos PDC, AD, PAISA, Liberación y PPS. En dicha declaración, sus suscriptores manifestaron que "las iniciativas para la instauración de la paz y para la finalización de la guerra son, por su propia naturaleza, esencialmente políticas y, en consecuencia, los partidos políticos son los instrumentos idóneos para encontrar la solución completa adecuada a la problemática nacional presente." Sin enfrentar abiertamente el debate nacional promovido por la Iglesia, los partidos lo descalificaron, al atribuirse a sí mismo la prerrogativa de conducir los esfuerzos de paz.

La izquierda no-armada, en cambio, mantuvo su trabajo político orientado a ampliar los espacios para una solución pacífica al conflicto. El 22 de agosto, los secretarios generales del MNR, Guillermo Ungo; del Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC), Rubén Zamora; y del Partido Social Demócrata (PSD), Reni Roldán, anunciaron oficialmente la decisión de Convergencia Democrática de participar en las elecciones presidenciales "con el objeto de impulsar una solución política negociada a la guerra." Los dirigentes de la coalición indicaron que tal decisión estaría "sujeta a una permanente evaluación de la existencia de condiciones básicas para el desarrollo de la campaña" y demandaron "respeto a la vida y la libertad de los militantes, respeto a la organización, movilización y proselitismo, acceso irrestricto a los medios de comunicación y tratamiento justo y limpio por parte de los organismos electorales," es decir, las condiciones de trabajo político que en El Salvador han sido privilegio exclusivo de los partidos de derecha durante décadas de autoritarismo político. Por su lado, la Unión Democrática Nacionalista (UDN) solicitó, el 11 de agosto, la actualización de su registro en el Consejo Central de Elecciones (CCE), a lo cual respondió favorablemente el presidente de dicho organismo una semana después.

Por las mismas fechas tuvo lugar el esfuerzo de repatriación de 1.230 refugiados salvadoreños procedentes del campamento de Mesa Grande, Honduras, y cuya obstaculización por parte del gobierno y, sobre todo, de las autoridades militares de El Salvador, puso de manifiesto hasta qué punto la multiplicación mecánica de procesos electorales y el presunto perfeccionamiento del sistema político no han cristalizado todavía en una democracia efectiva. Después de ocho años de vivir en condiciones inhumanas en Mesa Grande, sometidos a la arbitrariedad y el trato intimidatorio de las autoridades militares hondureñas, los más de 1.200 refugiados decidieron repoblar sus cantones en Tejutla y San Antonio Los Ranchos, en el departamento de Chalatenango, para volver a cultivar las tierras de las cuales la violencia de la guerra los expulsó a comienzos de la década. La repatriación tuvo lugar pese a que al gobierno salvadoreño, lejos de ofrecerles todas las facilidades, como lo demanda el acuerdo 8 de Esquipulas II y lo exige el artículo 5 de la constitución, puso diversas dificultades a la caravana de 48 buses y 116 camiones en los cuales se conducían los refugiados y sus escasas pertenencias. El coronel Ciro López, comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso (Chalatenango) expresó sin ambages la motivación última del comportamiento gubernamental: la mayor parte de los refugiados "son simpatizantes del FMLN," etiqueta suficiente para despojarlos de todos los derechos que como ciudadanos salvadoreños la constitución les confiere.

En contraste con la actitud gubernamental, el documento-síntesis que en esos momentos elaboraba la comisión técnica del debate, incluía diversas propuestas encaminadas a favorecer la reincorporación de la población

desplazada y refugiada a la vida nacional.

Asamblea pública del debate nacional

La asamblea pública, última fase del proceso del debate nacional según el cronograma elaborado por el comité organizador, se realizó los días 3 y 4 de septiembre en las instalaciones del Colegio La Sagrada Familia. A la inauguración del evento asistieron el Nuncio Apostólico, Monseñor Francesco De Nittis, así como prominentes figuras de la vida política nacional y miembros del cuerpo diplomático. Durante los dos días de la asamblea, los representantes de 60 organizaciones discutieron las 164 tesis contenidas en el documento-síntesis. En total, unas 63 organizaciones participaron en el desarrollo del debate, sea porque enviaron sus aportes escritos o porque intervinieron en las discusiones de la asamblea pública o, en el caso de la mayoría, porque participaron en ambas fases. Como resultado de la asamblea pública, los delegados participantes aprobaron un documento final que incluye 147 tesis que contaron con la aprobación de por lo menos el 50 por ciento de las organizaciones presentes al momento de ser sometidas a la consideración del pleno. Las tesis que no alcanzaron el 50 por ciento del respaldo fueron incluidas en un anexo al documento final. La mayoría de propuestas, y ciertamente las más sustanciales e importantes, contó, sin embargo, con el respaldo decidido del grueso de participantes. Esta coincidencia de criterio es importante porque responde a la voluntad mayoritaria del país y porque refleja el consenso de grupos sociales de muy distinta filiación ideológica.

En efecto, en la asamblea se dieron cita organizaciones cuyas diferencias ideológicas sólo pudieron ser superadas porque todas ellas supieron anteponer el interés general del país por encima de sus intereses particulares. No

Las diferencias ideológicas sólo pudieron ser superadas porque todas las fuerzas sociales supieron anteponer el interés general del país por encima de sus intereses particulares.

puede negarse que hubo en el desarrollo del debate un peso específico mayor del sector laboral, pero de ello no puede concluirse que el debate estuviera parcializado a favor del FMLN, como lo acusó apriorísticamente la derecha, a no ser que se suponga que la mayoría de las masas trabajadoras simpatizan con el FMLN. No es éste el caso de numerosas organizaciones laborales (CGT, CTS, FESINCONSTRANS, UCS, ACOPAI, UPD, etc.) presentes en el debate, las cuales han mantenido una postura explícitamente crítica respecto del ideario y, sobre todo, de los métodos de la lucha del FMLN, por más que el proyecto político revolucionario recoja sus intereses objetivos mejor que lo que puede hacerlo el proyecto demócratacristiano o el programa económico de ARENA. Por otro lado, estuvieron también presentes organizaciones cercanas a la UNTS a las cuales la propaganda gubernamental y las fuerzas de derecha han acusado repetidas veces de funcionar como organizaciones de fachada del FMLN. Con todo, las viejas rivalidades sindicales, muchas veces enconadas, cedieron en aras de un documento final que gozó del consenso más amplio posible. El aporte de entidades a las que en modo alguno puede tildarse de izquierdizantes, como el Instituto Salvadoreño de Administración Municipal (ISAM), la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios (AMPES) y la Universidad Nueva San Salvador (UNSSA) fue relevante en orden a moderar algunas formulaciones y ampliar los consensos, tarea a la cual contribuyó también ANDES en el campo de las organizaciones consideradas cercanas a un proyecto de izquierda. En general, fuera de algunas intervenciones ligeramente acaloradas, en casi todas prevaleció un clima de respeto, mesura y flexibilidad. El punto culminante del proceso de diálogo medurado y pluralista que prevaleció a lo largo de toda

la asamblea pública se dio cuando Monseñor Rosa Chávez propuso a los delegados un borrador de lo que podía ser la declaración final. La propuesta de Monseñor no sólo fue aprobada por unanimidad; en un gesto espontáneo, todos los participantes se pusieron de pie y le aplaudieron por varios minutos. La propuesta en cuestión exhortaba a los partidos políticos a incorporar en sus respectivas plataformas programáticas los puntos de consenso contenidos en el documento final del debate nacional; solicitaba al gobierno y al FMLN-FDR atender responsablemente las resoluciones de la asamblea pública e invitaba a las fuerzas sociales que no habían participado a incorporarse activamente al proceso del debate nacional por la paz.

Una de las principales propuestas aprobadas por la asamblea pública a efecto de institucionalizar los frutos del debate fue la decisión de integrar una comisión permanente encargada de darle seguimiento a los acuerdos aprobados y propiciar un amplio consenso nacional en la búsqueda de una salida pacífica a la guerra. El 16 de septiembre quedó integrada dicha comisión, por representantes de todos los sectores participantes en el debate. El 23 de septiembre, Monseñor Rivera entregó el documento final del debate al presidente Duarte, indicando que también se le haría llegar al FMLN a través de otros medios. Las resoluciones del debate serán entregadas asimismo a los partidos políticos.

El debate nacional, pues, ha cumplido sus propósitos. Pero la búsqueda de la paz es un compromiso de todos. Por eso es imperativo que las fuerzas políticas directamente involucradas en el conflicto respondan al clamor por la paz que a través del debate nacional han formulado las fuerzas sociales más representativas del país.